

El logro de la seguridad ciudadana debe basarse en cinco principios: 1) acatar el Estado de Derecho, 2) respetar los Derechos Humanos, 3) generar oportunidades para todos, 4) fortalecer las instituciones de seguridad, y 5) lograr sinergia entre los actores e instituciones.

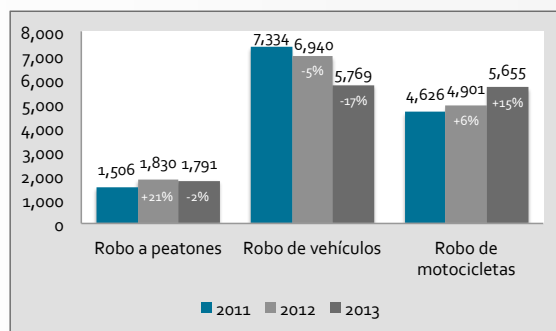
Los indicadores del delito muestran un estancamiento

Los indicadores señalan que la seguridad ha tenido una leve recuperación, pero se ha estancado. La tasa de homicidios frenó la tendencia a la baja que había experimentado desde el año 2009, en el que se ubicó en 46.4 homicidios por cada 100 mil habitantes. En el año 2013 la tasa fue de 34, la misma que en el año 2012.

Las denuncias de secuestros disminuyeron 6% de 2011 a 2012, y 15% de 2012 a 2013; las de extorsiones se redujeron 21% de 2011 a 2012, pero aumentaron 16% de 2012 a 2013; y las denuncias de delitos contra el patrimonio (robo a peatones, de vehículos y a viviendas) en términos generales se han incrementado.

Gráfica 1.

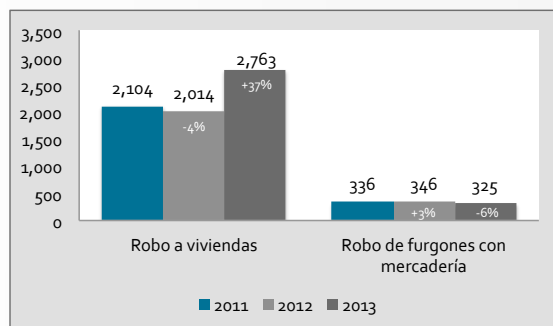
Denuncias por robo a peatones, de vehículos y de motocicletas



Fuente: elaboración propia con base en denuncias registradas por la Policía Nacional Civil

Gráfica 2.

Denuncias por robo a viviendas y de furgones con mercadería



Fuente: elaboración propia con base en denuncias registradas por la Policía Nacional Civil (furgones) y Ministerio público (robo a viviendas).

Ausencia de una Política de Prevención de la Violencia y el Delito

La prevención del delito y la violencia empieza a figurar como eje importante para la seguridad ciudadana. Sin embargo, aún no se cuenta con una política pública de prevención al delito como prioridad de Estado. En el actual gobierno se han realizado varias actividades y proyectos relacionados a la prevención, pero aún no constituyen estrategia de Estado, ni está focalizada en los barrios y municipios con mayores desafíos de violencia. Tampoco existe un sistema de monitoreo y evaluación de las actividades realizadas. Es necesario que todas las acciones se engloben en un modelo de Gestión por Resultados, a fin de no caer en activismo y enfocarse más en la consecución estratégica de un trabajo sistemático de prevención; medir su impacto y resultados, y no necesariamente solo el número de acciones o actividades.

Necesidad de modernizar la Carrera Policial

Se resalta positivamente el aumento de número de agentes, logrando subir la tasa por cada 10,000 habitantes, de 16.4 en el año 2011 a 19 en 2013; la apertura de dos sedes regionales de la Academia de la Policía Nacional Civil –PNC-; la aprobación del texto de la Doctrina Institucional; así como la creación de la Escuela de Oficiales de la PNC. Sin embargo, aún hay retos pendientes especialmente en la institucionalización de la carrera policial.

La modernización de la carrera policial implica crear e implementar nuevos y mejores modelos de reclutamiento, desempeño, evaluación y ascenso policial, los cuales son etapas de la carrera que no pueden operar de forma independiente. En la actualidad no existe una política clara de capacitación teórica y empírica de los policías en servicio, tampoco no se ha desarrollado un reglamento propio para evitar la discrecionalidad en los ascensos.

La falta de control interno en la PNC ha sido una debilidad institucional significativa. Se estima que el aumento del pie de fuerza en la PNC, debió acompañarse de una efectiva supervisión por parte de la Inspectoría General. En relación a infraestructura, no se tiene conocimiento de mejoras sustanciales en los últimos años. De las 546 sedes policiales, 291 eran alquiladas, por lo que no existe incentivo a la inversión y mejora de la infraestructura.

Es necesario el control institucional del Sistema Penitenciario

La ley del Régimen Penitenciario no se ha logrado implementar en sus siete años de vigencia. El reglamento general fue aprobado casi cuatro años después, a pesar que el plazo estipulado para su emisión fue de tres meses. Varios reglamentos importantes están pendientes de ser emitidos.

Mientras que la cantidad de privados de libertad crece a diario, no existe un plan de inversión en infraestructura para reducir el hacinamiento. Desde el año 2008 se registran aumentos anuales consecutivos superiores al 12% de la población reclusa, y no se ha invertido en nueva infraestructura, resultando en una tasa de ocupación promedio del 260%. Esto sitúa a Guatemala entre los 10 países más hacinados a nivel mundial, lo cual dificulta el control interno de los penales por parte de las autoridades.

La rehabilitación de los privados de libertad es el tema olvidado en el SP, la mayoría de los esfuerzos y recursos se concentran en temas de control y seguridad. El CIEN considera que es necesario elaborar un nuevo concepto de resocialización, el cual ponga a disposición de los internos una atención personalizada, un ambiente ordenado y debidamente supervisado, atención profesional al problema de adicciones y oportunidades de educación y trabajo. Para ello es necesario ajustar la normativa legal bajo la que opera el Sistema Penitenciario para adecuarla a la realidad.

El CIEN ha recomendado priorizar intervenciones urgentes para encaminar la recuperación del control interno, juntamente con la construcción de nueva infraestructura. Se considera importante resolver el problema de la señal de telefonía celular, ya que según el Ministerio Público, entre un 60-80% de las extorsiones siguen proviniendo desde los penales.

Se requiere fortalecer la Defensa Nacional

El apoyo del Ejército de Guatemala en la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado transnacional ha sido potencializado con el incremento de inteligencia civil y la creación de la Política Nacional de la Defensa la cual fue presentada en el año 2013. En ese mismo año se instaló la Brigada Especial de Operaciones de Alta Montaña en la frontera con México, la cual se concentra en combatir el cultivo y la producción de amapola.

El Ministerio de Gobernación ha creado 11 Fuerzas de Tarea para combatir la criminalidad: siete temáticas (según delitos de mayor incidencia criminal), tres territoriales, y una de seguridad fronteriza. El Ejército presta apoyo a la PNC a través de los Escuadrones de Seguridad Ciudadana que trabajando en conjunto con equipos de investigación criminal, el Ministerio Público y las Fuerzas Especiales Policiales efectúan acciones a fin de desarticular bandas criminales.

En los años 2012 y 2013 el Ejército aumentó su personal en aproximadamente 3000 elementos de la fuerza permanente y alrededor de 1500 del Cuerpo Especial de Reserva para la seguridad ciudadana. En estos años también se mejoró en parte la movilidad en Fuerzas de Tierra, no así las Fuerzas de Aire y Mar. Aunque se recibieron helicópteros donados por la comunidad internacional, el equipo para fortalecer la interdicción aérea no fue adquirido en su totalidad.

CIEN exhorta a realizar esfuerzos presupuestarios para priorizar la adquisición de equipo operativo, para mejorar la capacidad de interceptar acciones del crimen organizado y narcotráfico. El presupuesto del Ejército llegó al 0.48% del PIB en 2013, en tanto que Latinoamérica destinó al Ejército en promedio 1.26% del PIB. La asignación es inferior al techo presupuestario estipulado en los Acuerdos de Paz.

CIEN Recomienda:

Lograr el liderazgo determinante del Presidente de la República en conjunto con los otros organismos del Estado. Es imperante que en los próximos años se tenga como principal objetivo nacional la mejora de la seguridad ciudadana y la justicia. Esto implica trabajar de forma conjunta y armoniosa entre las instituciones del Organismo Ejecutivo y del Estado (principalmente Ministerio Público, Organismo Judicial y Organismo Legislativo) para lograr una sustancial mejora.

Contar con una hoja de ruta para la seguridad ciudadana y justicia. Para los próximos años se requerirá un plan con metas precisas y medibles, con acciones de corto y mediano plazo y con una visión de largo plazo. Ésta deberá tomar en cuenta un enfoque integral, partiendo de poner en marcha una estrategia de prevención.

Crear los marcos legales, institucionales y rendición de cuentas. Es recomendable revisar los marcos legales y ajustarlos a las demandas constitucionales y a la realidad del país. Luego deberá procederse a crear las políticas y reglamentos necesarios. Adicionalmente es urgente fortalecer entidades como observatorios ciudadanos que constantemente analicen datos y políticas y que “desde fuera” apoyen, profundicen, propongan y exijan resultados. La transparencia, el manejo eficiente de los recursos y la rendición de cuentas son fundamentales.

Mejorar las estadísticas del sector. Es importante contar con datos e información confiable, así como levantar encuestas de victimización objetivas con el fin de lograr el análisis y las intervenciones con sustento técnico.

Priorizar recursos. En relación al Organismo Ejecutivo, se requiere profesionalizar a los recursos humanos, invertir en infraestructura y mejorar los insumos de las instituciones para que operen eficientemente. Modelos de gestión por resultados permitirán un mejor uso de los escasos recursos económicos. La voluntad política se encuentra donde los recursos económicos se priorizan.



MEJOREMOS
GUATE

CENTRO DE INVESTIGACIONES económicas nacionales

10 calle 3-17 zona 10, Edificio Aseguradora General, Nivel 5, Ala Norte,
Ciudad de Guatemala, Guatemala 01010 Tel./ Fax: (502) 2331-1564

www.cien.org.gt



@MejoremosGuate



@CIENgt

¡Marcando el rumbo!